

Documentos

América Latina y el mundo rumbo al año 2000*

MIGUEL DE LA MADRID

LOS AÑOS OCHENTA han sido para América Latina una década con doble significado. Por una parte, representan el periodo de crisis más profunda que haya vivido la región en los últimos tiempos. Debido a la degradación severa de los niveles de vida de la población y al menoscabo de muchos de los componentes de las estructuras económicas regionales, se habla de una década perdida.

Por otra parte, en este mismo periodo ha tenido efecto una reordenación estructural de las economías, las sociedades y los estados en los países latinoamericanos. En este sentido, la década perdida es también el decenio de las reformas: en varios países se recupera la vigencia de las instituciones democráticas y se adoptan medidas de estabilización y ajuste, acompañadas de un conjunto de reformas estructurales que están sentando otras bases para una nueva fase del desarrollo.

Si bien es cierto que las medidas de ajuste y cambio estructural están todavía en curso y sus resultados son diferentes de país a país, no se advierten aún las consecuencias positivas que cabría esperar dada la magnitud del esfuerzo realizado por el subcontinente. A ello ha contribuido la permanencia de condiciones internacionales que, lejos de propiciar el avance económico de la región, lo han obstaculizado. Para transformar esta situación adversa en una favorable al desarrollo es indispensable una mayor cooperación de los países industrializados, que son los acreedores y los importadores fundamentales de América Latina y, al mismo tiempo, la fuente principal de tecnologías avanzadas y de recursos de capital.

* Discurso pronunciado en la Conferencia de Oportunidades para Canadá y América Latina, Universidad de Calgary, Canadá, el 6 de mayo de 1991.

I

Hasta fines de los años setenta, América Latina fue una región económica de crecimiento acelerado y de cada vez mayor peso en la economía mundial.

El dinamismo económico regional se basaba en un modelo de desarrollo que logró mantener grandes tasas de inversión sustentado en una importante intervención y regulación por parte del Estado, una industrialización protegida, una considerable disponibilidad de recursos externos y un favorable intercambio internacional. Esto, a su vez, permitió el mejoramiento de la infraestructura productiva, la expansión de las actividades económicas, el crecimiento del sector exportador, la creación de empleos y el incremento —así fuera desigual— de los niveles de bienestar social. Precisamente en lo social, se observó un proceso de rápida urbanización, el ensanchamiento de las clases medias y una dispar distribución del ingreso y de los efectos regionales del desarrollo.

Sin embargo, los elementos básicos de ese crecimiento, llevados al límite, así como los cambios de la economía internacional, produjeron mecanismos y situaciones que se convirtieron en obstáculos al crecimiento.

La intervención del Estado en la economía fue útil en la tarea de creación y sostenimiento de actividades nuevas: por medio de subsidios y exenciones se apoyó el desarrollo industrial y agrícola, y mediante la expansión del gasto público se crearon empleos y se establecieron empresas. Pero la extensión desmedida de la intervención estatal generó una excesiva centralización de la gestión económica que se tradujo en ineficiencia, estancamiento y déficit presupuestales que redundaron en desequilibrios macroeconómicos mayores.

La aplicación generalizada de la protección comercial elevó el costo social del desarrollo industrial a causa de los subsidios, el retraso tecnológico y la creación de mercados oligopólicos. El proteccionismo excesivo y prolongado también propició la concentración del ingreso y perjudicó a los consumidores. Además, se constituyó en mecanismo antiexportador al favorecer la producción para el mercado interno y restar competitividad a las exportaciones.

Los recursos crediticios externos sirvieron de apoyo importante en el avance económico, pero su crecimiento inmoderado sobrepasó los límites manejables y se convirtió en factor de presión que agudizó las tendencias negativas originadas por los otros dos elementos.

Finalmente, los términos de intercambio, positivos durante varias décadas para los productos primarios provenientes de la región, revirtieron su tendencia, lo que favoreció a los bienes manufacturados,

mientras nuestros países siguieron conformando el grueso de sus exportaciones con materias primas.

Así, a finales de los años setenta, las pautas de industrialización y crecimiento que desde 1950 habían permitido un muy elevado ritmo de expansión económica a la región (alrededor de 6% anual) entraron en una fase de agotamiento agudo. Este desgaste interno se profundizó al complicarse con el deterioro del ambiente económico internacional.

Dicho deterioro se caracterizó por el ya mencionado demérito de los términos de intercambio y por la reducción de los mercados de los países industrializados, hechos que provocaron, en América Latina, la disminución de las posibilidades de obtener recursos frescos mediante mecanismos sanos. El mercado financiero internacional primero elevó el costo de los créditos, y después cegó definitivamente el flujo de recursos hacia la región, con lo que causó la caída estrepitosa de América Latina en la crisis de la deuda externa.

De esta manera, el subcontinente inició la década de los ochenta sometido a las presiones que los profundos desajustes económicos internos y externos le impusieron.

A los enormes déficit en el comercio externo, la cuenta corriente y las finanzas públicas, se aunaron un escaso dinamismo económico ocasionado por la caída de la inversión, el descenso del empleo, la aceleración inflacionaria y la salida de recursos hacia el exterior provocada por la dolarización, la fuga de capitales privados y el pago del servicio de la deuda externa. En estas circunstancias, los gobiernos de la región han impulsado, en diverso grado, la adopción de medidas de ajuste y estabilización por medio de disposiciones fiscales, monetarias y cambiarias que pretenden el restablecimiento de los equilibrios económicos fundamentales, medidas que desembocarían en otras más amplias de cambio estructural que comparten, como elementos comunes, la rectificación del rumbo en lo que se refiere a la forma de inserción internacional, así como en lo que toca al modelo de la estructura económica interna: búsqueda de nuevas formas de desarrollo industrial y redefinición del papel del Estado y de los agentes económicos.

El objetivo inicial de las medidas económicas era el ajuste, el control de la crisis, pero conforme se afinaron los diagnósticos sobre la misma, fue surgiendo como pretensión básica la promoción de transformaciones estructurales.

Las medidas económicas dieron prioridad a la reforma del sector externo. Se limitaron las importaciones y se respaldó de diversas maneras la producción de bienes comercializables en el exterior. Se aplicaron medidas de liberalización comercial por medio de reformas arancelarias, lo mismo que de eliminación de restricciones cuantitativas y

de barreras no arancelarias; también se hicieron ajustes radicales a los tipos de cambio. Con ello se logró transformar los déficits comerciales en superávit que permitieran hacer frente, al menos en parte, al servicio de la deuda externa.

Asimismo, se reestructuró el sector público efectuando cortes sustantivos en el financiamiento de la inversión y el gasto corriente, trasladando activos y empresas de propiedad estatal al ámbito privado, elevando los precios de los bienes y servicios públicos y reduciendo los subsidios. Todo esto contribuyó de manera sustancial a la disminución del gasto público y, por esa vía, al acortamiento de los déficits presupuestales.

Las reformas han incluido también la simplificación y el ajuste del sistema tributario para adecuarlo a los procesos inflacionarios y proteger la recaudación. Además se han puesto en práctica reformas financieras con las que se pretende, fundamentalmente, fijar las paridades cambiarias atendiendo a la lógica de los mercados de dinero y eliminar de un modo gradual los subsidios a las tasas de interés a fin de alentar una mayor competencia en los mercados crediticios.

De esta manera, las reformas aplicadas tienen el fin de dar mayor atención a la competitividad internacional, acentuar el papel del mercado como mecanismo de asignación de recursos, reducir y reorientar la función del Estado en el manejo económico y estimular a los agentes privados como la fuerza motriz del crecimiento económico.

Sin embargo, la agudeza de la crisis generó un enorme costo en términos de crecimiento, ahorro e inversión, así como una grave desmejora en los niveles de bienestar social. Las disposiciones gubernamentales no han podido compensar por completo estos efectos negativos.

Durante el decenio que inició en 1980 el crecimiento de las economías latinoamericanas fue sumamente bajo, 1.2% anual, en contraposición con el del periodo 1960-1980, que fue de 5.8%. Durante la década de los ochenta, el aumento demográfico fue de 2.2% en promedio anual, por lo que el ingreso per cápita de la población latinoamericana, en su conjunto, se redujo en más del 10%, y llegó a un nivel equivalente al de 13 años antes.

Independientemente de los factores internos de esta crisis, el deterioro de los términos de intercambio provocó, entre 1980 y 1989, una disminución de más de 20% en el ingreso real disponible de la región. Las transferencias de recursos al exterior relacionadas con el servicio de la deuda externa representaron un drenaje de cerca de 4% del producto global regional anual.

La contracción económica estuvo acompañada de una muy fuerte baja en la formación de capitales. El coeficiente medio de inversión descendió a una proporción de 16% del producto bruto en 1983-1989, frente

a una cifra del orden de 14% en el segundo quinquenio de los setenta.

Así pues, el servicio de la deuda externa no sólo contribuyó a las restricciones externas, sino a la contracción de la inversión interna y, por su efecto en las finanzas públicas, a la retroalimentación de las tensiones inflacionarias.

A consecuencia de las tendencias descritas, muchos países enfrentan en la actualidad la creciente obsolescencia de la planta productiva, un alarmante deterioro de la infraestructura física y, lo más grave, un descenso visible de los niveles medios de bienestar material.

Con la crisis y los procesos de ajuste se agravaron los desequilibrios estructurales y las desigualdades en la distribución del ingreso. En el periodo 1981-1989 la dinámica del ingreso per cápita real fue negativa en 19 de los 25 países de América Latina y en la mayoría de ellos tal ingreso volvió a los niveles de 1977. El salario mínimo real pasó de un índice de 100 en 1980 a 75 en 1989.

Esta situación determinó que el número de personas incluidas en la categoría de pobres se elevara en 1986 a 164 millones, equivalente a 38% de los hogares, cuando en 1980 esas cifras eran de 112 millones y 35% respectivamente.

Lo preocupante es que tal empobrecimiento está aún por reflejarse en la evolución de los indicadores básicos (esperanza de vida, analfabetismo y mortalidad infantil) debido a que estos fenómenos se manifiestan con relativo retraso respecto a los procesos económicos.

Este recuento presenta un panorama sombrío de la región latinoamericana. Sin embargo, cabe señalar que hay condiciones diferentes de un país a otro, no tanto porque los indicadores sean muy distintos, sino por el hecho de que algunos países han logrado avanzar más que otros en la aplicación de los programas de ajuste, lo cual permitiría suponer que tienen perspectivas de crecimiento mucho más promisorias.

A pesar de esta diferenciación en los grados de avance del ajuste y de que las restricciones al desarrollo son muy distintas en los diferentes casos, la región comparte de manera más generalizada elementos que apoyan, en principio, un mejor desempeño futuro. Estos elementos tienen que ver con el alto grado de aceptación de un nuevo consenso sobre las condicionantes básicas de un renovado crecimiento económico.

A este respecto, sobresale la reconstitución de la vida democrática en la gran mayoría de nuestros países, que abre la posibilidad de una discusión plural de los avances en la gestión económica y una más amplia participación social en las tareas del desarrollo.

De la misma manera, se ha venido afianzando una cultura exportadora que se acompaña de una mayor atención a la competitividad in-

ternacional y de una reconsideración del papel central del mercado como mecanismo asignador de recursos.

Todo esto, que implica una revaluación de la función del Estado y de los empresarios en la economía, permite pronosticar un desempeño económico más centrado en la eficiencia y en el uso racional de los recursos internos y externos. Esta tendencia sería reforzada por el reconocimiento de que los equilibrios macroeconómicos son elementos esenciales para avanzar en la transformación económica.

Éstas son las nuevas realidades a partir de las cuales América Latina debe proyectarse al inicio de la década de los noventa; una coyuntura donde las tendencias presentes en el marco internacional tendrán un papel muy relevante.

II

A lo largo de la última década, las circunstancias internacionales fueron desfavorables para América Latina. Las condiciones económicas básicas que magnificaron la profundidad de su crisis no han sido revertidas y se mantienen como uno de los principales obstáculos para la recuperación del crecimiento.

No obstante, al finalizar los años ochenta, el orden mundial parece haber empezado a sufrir cambios sustanciales en los que coexisten elementos que, en un sentido, pueden favorecer el desarrollo latinoamericano, pero en otro, pueden reforzar las situaciones adversas a la recuperación de nuestros países.

Las relaciones que desde el decenio de los ochenta prevalecen entre las grandes potencias económicas generan tendencias de inestabilidad e incertidumbre sobre el comportamiento de la economía mundial.

En términos del comercio, esto se ha manifestado en el hecho de que el reciente crecimiento de las importaciones de los países industrializados, con tasas diferenciadas para los bienes primarios y manufacturados, ha venido acompañado de fuertes trabas proteccionistas.

Resulta paradójico ahora que, mientras los países de América Latina reducen sus restricciones al comercio, los países industrializados mantengan medidas de la más diversa índole: restricciones voluntarias a la exportación, medidas *antidumping*, derechos compensatorios, restricciones fitosanitarias y subsidios a su aparato productivo.

Esto ha dado lugar a que el ritmo de crecimiento del comercio internacional tenga un bajo nivel (3% de 1980 a 1986 contra 5% de 1970 a 1979), en especial para los productos agropecuarios, que constituyen parte fundamental de las exportaciones latinoamericanas. Por otro la-

do, se ha impuesto un costo adicional a la transformación productiva, al aplicar barreras comerciales mayores a los bienes manufacturados de los países en desarrollo.

América Latina necesita continuar su reestructuración productiva e incorporar más tecnología en sus exportaciones, pero esta demanda requiere una consideración más favorable de los países industrializados para los productos que exporta la región, a fin de permitir la recuperación gradual de la posición relativa que tenía en el comercio mundial en la época anterior a la crisis.

En el ámbito de los movimientos internacionales de capital, las condiciones tampoco han variado con respecto a las que coadyuvaron al estallido de la crisis de los años ochenta. Continúa la inestabilidad cambiaria de los países industrializados, la cual, regulada por un patrón dólar con paridades cambiarias variables, altera de manera constante y en plazos muy cortos la competitividad de las exportaciones latinoamericanas.

A esto se agrega que el proceso de creación de liquidez internacional sea muy fluctuante y esté dominado en buena parte por las acciones de agentes privados nacionales y transnacionales que no responden a las necesidades generales del desenvolvimiento de la economía mundial y menos aún a las de los países en desarrollo.

Por otro lado, los desajustes profundos en las cuentas externas de Estados Unidos, convertido en deudor principal y en centro de atracción de inversión extranjera directa, tienden a mantener elevado el nivel real de las tasas de interés internacional, lo que hace más gravoso el servicio de la deuda externa y desalienta la inversión.

Todo esto ha hecho que la carga financiera para América Latina continúe muy alta, y al mismo tiempo ha reducido las oportunidades de financiamiento nuevo, y ha convertido a la región en exportadora neta de capitales desde 1982.

Paralelamente, han menguado los flujos de capital productivo a la región, como lo muestra el hecho de que la participación de América Latina en la inversión directa a nivel mundial haya descendido sustancialmente desde que se inició la crisis de la deuda externa, que llegó a 5.3% en el periodo 1986-1987 en comparación con 12.5% en el periodo 1977-1981.

Así, el bajo dinamismo del comercio internacional y las tendencias neoproteccionistas en los países industrializados, junto con el mantenimiento de un alto costo de la deuda externa y la escasez de flujos crediticios y de capitales productivos, constituyen el núcleo de las influencias internacionales adversas al desarrollo latinoamericano. No obstante, existen elementos novedosos que pueden reforzar o, alterna-

tivamente, contrarrestar las tendencias antes reseñadas.

Empecemos con las aceleradas transformaciones tecnológicas. La transición hacia un nuevo paradigma tecnológico, centrado en la microelectrónica y la información como los motores de la dinámica económica, requiere nuevas formas de gestión del trabajo y nuevas condiciones del proceso productivo. Esto presenta amenazas y oportunidades para la región latinoamericana.

En el primer sentido, estos adelantos tecnológicos atentan contra las ventajas comparativas actuales de América Latina. La robótica y la automatización influyen negativamente en la mano de obra, pues reducen sus beneficios tanto por la vía del empleo como por la del salario.

El avance en el aprovechamiento de las materias primas tradicionales y la creación de nuevos materiales afecta el volumen de la demanda y el precio de las materias primas que exporta la región.

A pesar de esto, también es cierto que la flexibilización del trabajo ofrece nuevas oportunidades, no sólo en la elevación de la eficiencia productiva y la competitividad internacional, sino por la posibilidad de superar la estrechez del mercado interno en el mediano plazo. Además, las nuevas tecnologías diluyen las fronteras sectoriales y propician la creación de complejos productivos a partir de los recursos naturales, abundantes en la región.

El desarrollo de la informática puede coadyuvar a la eficiencia administrativa creando un entorno más favorable a las actividades productivas, mientras que los avances en biotecnología abren un espacio insospechado a la desalinización, la exportación proveniente de las tierras áridas y el aumento de la productividad agrícola mediante la mejora en la calidad de las semillas. Así, el adelanto tecnológico constituye, para América Latina, una realidad con dos caras.

Lo mismo sucede con los otros dos fenómenos internacionales que deseamos comentar: el fin de la Guerra Fría y la regionalización de los mercados. Para América Latina, el fin de la confrontación Este-Oeste presenta, por un lado, aspectos positivos, entre ellos el hecho de que la discusión sobre posibilidades de desarrollo sea factible en un marco de opciones políticas libre ya de la tensión bipolar. También permite considerar una posible disminución de los gastos militares, que liberaría recursos que podrían ser destinados a respaldar los esfuerzos de desarrollo de los países de la región.

Por otro lado, el surgimiento de un orden mundial basado en la supremacía militar de Estados Unidos y la división multipolar del poderío económico permite prever una acentuación de la hegemonía norteamericana en el hemisferio, aun cuando es posible que la disminución relativa de la influencia de Estados Unidos en los asuntos euro-

peos resulte en una mejor ponderación de la importancia de América Latina para ese país, que puede tener como efecto positivo un mayor interés estadounidense por la recuperación económica de la región. Una muestra inicial de esta nueva actitud es la Iniciativa para las Américas del presidente Bush.

En este mismo sentido podría influir la actual regionalización del mercado mundial. El modo en que se conforme la Europa unificada determinará su posición como mercado abierto al comercio con terceros países, lo que ofrecería grandes oportunidades a América Latina, o como mercado cerrado, lo cual acentuaría el neoproteccionismo, bloquearía el acceso de nuestros países y reforzaría las tendencias internacionales a la consolidación de grupos económicos regionales relativamente aislados.

Asimismo, la definición de los países industrializados de la Cuenca del Pacífico asiático, y en especial de Japón, será otro elemento importante para crear o cancelar posibilidades para la recuperación del desarrollo de América Latina. Por último, es posible que esta regionalización y el incremento consecuente de la competencia a nivel mundial acreciente la importancia relativa de la economía latinoamericana y, por ende, aumente las posibilidades de negociación para un mejor acceso a los diversos mercados.

De las consideraciones expuestas, se puede colegir que el marco internacional no encierra un sentido unívoco en lo que a las necesidades de desarrollo de América Latina se refiere. La incertidumbre se ha convertido en la pauta dominante del panorama internacional. Lo evidente es que, dado el tipo de estrategias de desarrollo que la región empieza a utilizar, la importancia fundamental de los factores condicionantes externos es innegable, como innegable es también el hecho de que algunos de dichos factores tienen que cambiar sensiblemente si América Latina ha de salir de la crisis y reanudar el camino del desarrollo.

III

La recuperación económica de América Latina en su conjunto es incierta aún, puesto que el esfuerzo de ajuste interno realizado por nuestros países es todavía insuficiente y, además, no se ha visto aparejado de un mejoramiento firme de las condiciones internacionales que dieron lugar al surgimiento de la crisis.

Por razones internas, es preciso que la región reemprenda el sendero del crecimiento; pero esto debe ocurrir también por razones exter-

nas, pues la economía mundial puede recuperar un comportamiento más estable y dinámico con la aportación de América Latina.

El peso relativo de la región en el mundo lo sustentan los siguientes datos:

La población de la región era de 422 millones de habitantes en 1989, que representaban 8.75% de la población mundial; se proyecta que con una tasa de crecimiento anual de 1.8% la población alcance en el año 2000 la cifra de 514 millones, lo que equivale a dos veces la población de la Comunidad Europea.

La participación latinoamericana en el producto global mundial fue de alrededor de 7% en 1980, si bien la crisis la hizo descender a algo menos de 5% en 1988.

En lo que se refiere a la participación en el comercio mundial, las exportaciones y las importaciones de América Latina representaron cada una alrededor de 6% en 1980, aunque, como efecto de la crisis, dicha cifra se redujo a 3.9% y 3.3%, respectivamente, en el año 1988.

Estos indicadores nos dan una pauta para pensar que la recuperación económica de América Latina tendría una repercusión positiva en la economía mundial mientras que, por el contrario, la continuación de la crisis puede volverse costosa para la economía internacional en su conjunto.

La deuda externa es un problema que exige soluciones urgentes y efectivas. Por este rubro, América Latina ha transferido al exterior más de 240 millones de dólares en el periodo 1982-1990, pero es imposible que continúe a ese ritmo. Así lo revela el hecho de que en 1990 la región haya incurrido en una mora de 11 millones de dólares, equivalente a poco más de un tercio del servicio que debía haber cubierto, lo cual manifiesta que, en este aspecto, las medidas de ajuste están llegando a su límite y que se requieren acciones que permitan realmente reducir el costo de la deuda externa; de lo contrario, se corre el riesgo de llegar a una situación de moras crecientes que significarían un costo elevado para el sistema financiero y un demérito adicional en el crédito externo de los países morosos.

Además, la reducción del peso real de la deuda permitiría a los gobiernos de la región aminorar la presión sobre las finanzas públicas y, por esa vía, controlar efectivamente la inflación, para poder pasar entonces, con mayor consistencia, a la fase del cambio estructural de las economías. Esto último pondría a la región en el camino de la recuperación económica, lo que podría empezar a revertir la pérdida que los países industrializados han sufrido con el decremento de la capacidad de importación de América Latina.

Como hemos visto, se precisan cambios sustanciales en la econo-

mía mundial, en especial en lo que atañe al tratamiento del problema de la deuda, la atenuación de las inclinaciones proteccionistas y la liberalización del comercio, así como la reapertura de los flujos de inversión productiva y transferencia tecnológica. Está en el interés de todos emprender acciones coordinadas en estos rubros, que permitan crear una situación mundial más favorable al desarrollo.

La necesidad de cambios positivos en el entorno internacional de América Latina, sobre lo cual hemos hecho hincapié en este trabajo, no releva a los países latinoamericanos de la urgencia de llevar adelante sus procesos de ajuste y reforma estructural, ya que, de otra manera, la recuperación de la capacidad de desarrollo no sería viable. Como hemos afirmado, la experiencia reciente ha sido muy distinta en los diversos países de la región. Algunos de ellos, infortunadamente los menos, han tenido avances significativos, pero en la mayoría todavía existen agudos procesos hiperinflacionarios, subsiste el estancamiento económico y la degradación del desarrollo social. La crisis económica persiste y aumentan los riesgos de la inestabilidad política.

No hay otra posibilidad que la continuación de un esfuerzo profundo de reorientación económica y cambio estructural. Las condiciones mundiales tienden al establecimiento de una economía más integrada y de fuerte competencia. Los países que no logren adaptarse a las nuevas circunstancias pueden verse seriamente rezagados y continuar en un peligroso proceso de declinación.

De esta manera, las perspectivas de América Latina hacia el año 2000 son todavía inciertas. Su recuperación depende, en lo esencial, del esfuerzo interno en cada país, pero no cabe duda de que la cooperación internacional coadyuvaría en forma determinante a su logro.

Una nueva dinámica del desarrollo en América Latina no sólo conviene a los países de la región: redundaría también en un mayor dinamismo de la economía internacional e influiría en el nuevo orden mundial en gestación.

Un papel destacado en la restauración del desarrollo de América Latina puede corresponder a Canadá y Estados Unidos. Los países industrializados del hemisferio americano deben estar interesados en procurar la existencia de un continente próspero y sólido en lo económico, y estable, seguro y democrático en lo político. Esto exige una nueva etapa de crecimiento con equidad y productividad.

Las otras regiones del mundo, en particular los países de la Comunidad Europea y Japón, no deben desentenderse de América Latina, cuya recuperación es vital para el mundo, al cual no le convienen zonas estancadas y depauperadas. Los conflictos regionales que genera la pobreza son riesgos para la paz mundial.

Un nuevo esquema de colaboración internacional se hace indispensable. La reestructuración del orden mundial no podrá tener éxito permanente sin el equilibrio de sus diferentes zonas y la disminución de la creciente desigualdad en ellas. La libertad, la justicia y la democracia son los valores sobre los cuales debe fundarse el sistema internacional.

La formación de grupos regionales debe evitar el aislacionismo y la hostilidad que impedirían los nuevos arreglos que se pretende introducir. El fortalecimiento del imperio del derecho internacional y de la autoridad de las organizaciones mundiales y regionales debe ser el camino que recorramos juntos, sabedores de que el mundo es nuestra casa común y de que nada de lo que suceda en cualquiera de sus regiones nos es ajeno.